

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	: LUZ ANGELA LONDOÑO ÁLVAREZ
DEMANDADO :	: COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: EJECUTIVO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-012-2022-000285-01
RADICADO INTERNO	: 365-22
DECISIÓN	: REVOCA Y CONFIRMA AUTO
ACTA NÚMERO	: 024

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el recurso dentro del proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte ejecutante presenta escrito mediante el cual solicitó se librara mandamiento de pago en contra de Colpensiones en los siguientes términos:

“PRIMERA: Librar mandamiento ejecutivo de pago de la suma de (\$228.818.875) por concepto de mesadas a partir del 3 de septiembre de 2012, con su interés moratorio, con fecha de pago proyectada a corte 1 de agosto de 2022, en favor de la señora LUZ ANGELA LONDOÑO ALVAREZ.

SEGUNDA: Librar mandamiento ejecutivo de pago en contra de COLPENSIONES por las sumas legalmente adeudadas que se causen con posterioridad a esta demanda y los respectivos intereses moratorios que se deberán liquidar al momento efectivo del pago de la obligación.

TERCERO: Que se condene a la COLPENSIONES- al pago de las costas y agencias en derecho, que se originen en el presente proceso”.

Por lo anterior mediante auto del 05 de octubre de 2022, (PDF 10), el juzgado al resolver la solicitud mencionada dispuso negar el mandamiento de pago solicitado.

RECURSO DE APELACION.

Inconforme con la decisión anterior el apoderado de la parte ejecutante interpuso recurso de apelación manifestando que el 01 de febrero de 2019, luego del proceso ordinario adelantado en contra de la aquí accionada, se produce sentencia que impuso la condena de reconocer la pensión de vejez a la actora, la que fuera confirmada por el Tribunal superior de Medellín.

Que en el desarrollo de la audiencia en la que se produjo tal condena, la parte actora solicitó al juez definir exactamente la fecha en que debía cumplirse la obligación. Esta claridad la supeditó el fallador, a la presentación del retiro de cotización del sistema por parte de la actora, hecho ya acreditado en el expediente.

Que, tras múltiples solicitudes a la aquí actora, sobre el cumplimiento de la condena impuesta y tras varios años, el 13 de julio aparece la radicación del proceso ejecutivo conexo a ordinario laboral, y para el 29 de septiembre de 2022 se publica el auto 01948, mediante el cual el juzgado 12 laboral realiza requerimiento previo a resolver el mandamiento de pago a fin de que se aporte la constancia del retiro del sistema.

Que, para el 3 de octubre, se remite correo al despacho cumpliendo con dicho requerimiento y anexando el documento requerido en su solicitud de verificación. Que para el día 6 de octubre, el despacho resuelve denegar el mandamiento de pago deprecado en el proceso ejecutivo, indicando además que a la fecha incluso, el juzgador no ha publicado el recibo del anterior correo, en la página de la rama judicial, consulta de procesos, situación que implica que no se tuvo en cuenta al momento de resolver.

Indica además que a la entidad COLPENSIONES le impuso una obligación de hacer, de reconocer la pensión en favor de su acreedor Luz Ángela Londoño y lo realizó precisamente en su expresión común providencia judicial no por ello insignificante.

Que en la sentencia que sirve de título ejecutivo solo condicionó dicho reconocimiento al efectivo retiro, hecho más que conocido por la entidad y

por el despacho y a este último se le refirió tal información durante el proceso ordinario y actualmente ante su requerimiento previo a decretar mandamiento de pago en el proceso ejecutivo, pero el juez obvia dicho cumplimiento por la parte actora, no hace alusión a su propio requerimiento, como tampoco a la entrega que se surtió oportunamente, desconociendo que desde el 04/10/2010 se realizó tal acto (requerimiento), esto es, el retiro del sistema general de pensiones y que cesó correctamente las cotizaciones para tal riesgo, desconoce precisamente el fallador que cumplido dicho evento, la obligación en cabeza de COLPENSIONES, es clara expresa y exigible y podrá demandarse ejecutivamente, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por vía ejecutiva.

Además de lo anterior indica que es procedente librar mandamiento de pago por los intereses moratorios previstos en artículo 141 de la Ley 100 de 1993; con lo cual afirma no estar de acuerdo pues indica que como el despacho lo predica se trata de una solicitud, que podrá ser desafortunada, pero, que es precisamente el fallador quien determinara si procede o no, independiente de que se tenga en el crédito, lo que el despacho debe es proveer en tal sentido y de no ser procedente negar el crédito en cuestión de incorporación de dichos intereses, pues el cumplimiento de la sentencia continua incólume y “...sólo se puede librar mandamiento de pago por lo ordenado en su parte resolutive más no por otros conceptos.”

Que de conformidad con los requisitos del título ejecutivo debe cumplirse lo siguiente: La obligación debe estar declarada de tal manera que se pueda determinar con precisión en qué consiste: **Reconocer la pensión.** La obligación debe ser precisa y se debe identificar con claridad qué se debe, a quien se debe y quién debe. **Colpensiones debe reconocer la pensión a Luz Angela Londoño.** La obligación debe ser exigible, y esta es exigible cuando se puede identificar a obligación, al deudor y al acreedor, y principalmente, cuando ha expirado el plazo para satisfacer la obligación. **La sentencia por términos de Ley debió cumplirse como lo ordena la ley, situación que no realizo el deudor.** La ley no enumera cuáles pueden ser los títulos ejecutivos, así que puede ser cualquier documento, contrato o título valor. En consecuencia, un título ejecutivo puede ser cualquier contrato, sentencia judicial, acto administrativo, conciliación, etc., en el que estén presentes los requisitos de un título ejecutivo.

Que el juez desconoce que estamos frente a una ejecución, una orden de hacer, predicable en forma dineraria, en cantidad liquida, y el hecho de que

se soliciten intereses no lo desvirtúa, si la obligación es de pagar una cantidad líquida de dinero e intereses, la demanda podrá versar sobre aquella y estos, desde que se hicieron exigibles hasta que el pago se efectúe. El ejecutado podrá pedir la regulación o pérdida de intereses, proponer excepciones, la reducción o la fijación de la tasa de cambio, el juez librará mandamiento de pago ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que considere legal, y que por lo tanto los defectos frente al título ejecutivo no puede desconocer los derechos de tal forma, pues lo contrario sería adelantar otro proceso ordinario ante el juez para que adelante o declare el reconocimiento, sin que haya lugar a nuevo reparto.

ALEGATOS DE CONCLUSION

Las partes no presentan alegatos de conclusión.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Para resolver, es de resaltar que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con el Artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los Artículos 29 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los Artículos 65 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente, entendiendo que las partes quedaron conformes con lo resuelto de más en la primera instancia.

Se centra el problema jurídico en esta instancia en determinar si hay lugar a librar mandamiento de pago por el retroactivo de la pensión de vejez desde el 3 de septiembre de 2012, y por los intereses moratorios sobre dichas sumas.

Por lo anterior se resolverá el problema jurídico en el siguiente orden:

De los requisitos del título ejecutivo, y la indexación de las mesadas pensionales.

Al respecto establece el artículo 100 del C.S.T con relación a la procedencia de la ejecución lo siguiente:

“ARTICULO 100. PROCEDENCIA DE LA EJECUCION. Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del

*deudor o de su causante o **que emane de una decisión judicial o arbitral firme.***

Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este Capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, según sea el caso”. (subraya de la Sala).

En el mismo sentido el artículo 422 del C.G.P establece con respecto al título ejecutivo lo siguiente:

*“Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de **una sentencia de condena proferida por juez** o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley (...)”. (subraya de la Sala)*

Y el artículo 306 del C.G.P respecto a la ejecución de sentencias establece lo siguiente:

*“ARTÍCULO 306. EJECUCIÓN. Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, **el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada.** Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior..”.*

Partiendo de lo anterior debe tenerse en cuenta que según lo dispuesto en el artículo 278 del C.G.P puede emitir autos y sentencias. Particularmente en lo que se refiere a las sentencias y el contenido de las mismas el artículo 280 ibidem expresa:

“ARTÍCULO 280. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella.

La parte resolutive** se proferirá bajo la fórmula “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley”; **deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las

pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código.

Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda y su contestación”.

Ahora, con respecto a los requisitos del título ejecutivo, se hará un breve apunte respecto del contenido semántico que le es propio a cada uno de estos términos:

*a. **Que la obligación sea clara:** consiste en que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (obligación real o personal), como sus sujetos (acreedor y deudor), además de la descripción de la manera como se ha de llevar a cabo la prestación (plazo o condición), presupuesto sin el cual no sería posible determinar con la certeza requerida el momento de su exigibilidad y la verificación de un eventual incumplimiento.*

*b. **Que la obligación sea expresa:** quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patentada en el documento ejecutivo. Esta determinación, por tanto, solamente es posible hacerse por escrito. En otras palabras, este requisito se cumple cuando los elementos constitutivos de una obligación que se pueda llamar clara se hacen constar por escrito en un instrumento que servirá de prueba inequívoca de la existencia de una obligación.*

*c. **Que la obligación sea exigible:** Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o, que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido ésta, sea por mandato legal o por acuerdo entre las partes contractuales. (Juan Guillermo Velásquez “De los procesos ejecutivos”).*

Partiendo de todo lo descrito debe observarse que fue lo que se ordenó en las sentencias del proceso ordinario del cual ahora se pretende la ejecución.

En sentencia del 01 febrero de 2019, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, dispuso lo siguiente:

“Primero: Se DECLARA la INEFICACIA del traslado efectuado por la señora LUZ ANGELA LONDOÑO ALVAREZ, identificada con C.C. N° 42.965.498, del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, materializado a través del formulario de afiliación suscrito con COLFONDOS S. A., entendiendo que siempre estuvo afiliado al régimen de prima media con prestación definida, administrado hoy por Colpensiones, la cual deberá recibir la totalidad de aportes provenientes del RAIS.

Segundo: Se ORDENA a Colpensiones, a recibir los referidos valores; y a aceptar a la señora LUZ ANGELA LONDOÑO ALVAREZ, como afiliada al régimen de prima media con prestación definida en los mismos términos de la afiliación inicial.

Tercero: Se declara que la demandante cumple con los requisitos para pensionarse bajo las prerrogativas del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, una vez acredite la desafiliación del sistema.

Cuarto: las excepciones propuestas quedan implícitamente resueltas en la presente decisión.

Quinto: COSTAS del proceso a cargo de COLFONDOS S.A, en favor de la demandante, Se fijan agencias en derecho en la suma de \$828.116 a cargo de COLFONDOS S.A. Sin costas a cargo de COLPENSIONES". (resalto intensional).

Posteriormente ante los recursos de apelación interpuestos esta Sala mediante providencia del 23 de septiembre de 2019 dispuso CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, aclarando que la devolución que deberá hacer Colfondos S.A. a Colpensiones será respecto a la devolución del capital con sus rendimientos, el porcentaje deducido por comisión por administración y el 1.5% correspondiente a la garantía de pensión mínima.

Ahora, para el caso bajo estudio debe tenerse en cuenta que según la prueba allegada por la parte ejecutante al expediente, Colpensiones a través de la Resolución SUB 182303 del 12 de julio de 2022 (fls 03 y ss del PDF 08), dispuso reconocer el pago de una pensión de vejez a favor la señora LONDOÑO ALVAREZ LUZ ANGELA, en cuantía de un salario mínimo **a partir del 24 de marzo de 2019**, en cuya resolución se aplicó la prescripción parcial de tres años contenida en los artículos 488 del C.S.T y 151 del C.P.T, habida cuenta que la reclamación de pensión según lo consignado en dicha resolución fue radicada ante dicha entidad el 24 de marzo de 2022.

A pesar de lo anterior, para el caso bajo estudio es claro para la Sala que si bien en las sentencias del proceso ordinario base de la presente ejecución del 01 de febrero y 23 de septiembre de 2019 no se liquidó monto alguno por retroactivo pensional a favor de la señora LUZ ANGELA LONDOÑO ALVAREZ, y que por lo tanto no habría una suma concreta por la cual se podría librar mandamiento de pago en contra de Colpensiones, también es cierto que en dicha providencia que ya se encuentra en firme se indicó y se ordenó de forma expresa en su parte resolutive que la demandante tiene derecho a la pensión de vejez por cumplir con los requisitos de la ley 797 de 2003 **una vez acreditara la desafiliación del sistema.**

Ahora, respecto a la obligación de hacer el artículo 433 del C.G.P establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 433. OBLIGACIÓN DE HACER. Si la obligación es de hacer se procederá así:

1. En el mandamiento ejecutivo el juez ordenará al deudor que se ejecute el hecho dentro del plazo prudencial que le señale y libraré ejecución por los perjuicios moratorios cuando se hubieren pedido en la demanda.

2. Ejecutado el hecho se citará a las partes para su reconocimiento. Si el demandante lo acepta, no concurre a la diligencia, o no formula objeciones dentro de ella, se declarará cumplida la obligación; si las propone, se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo anterior.

3. Cuando no se cumpla la obligación de hacer en el término fijado en el mandamiento ejecutivo y no se hubiere pedido en subsidio el pago de perjuicios, el demandante podrá solicitar, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de dicho término, que se autorice la ejecución del hecho por un tercero a expensas del deudor; así se ordenará siempre que la obligación sea susceptible de esa forma de ejecución. Con este fin el ejecutante celebrará contrato que someterá a la aprobación del juez.

4. Los gastos que demande la ejecución los sufragará el deudor y si este no lo hiciere los pagará el acreedor. La cuenta de gastos deberá presentarse con los comprobantes respectivos y una vez aprobada se extenderá la ejecución a su valor”.

Partiendo de la normativa en cita y atendiendo a la situación fáctica descrita se tiene que lo dispuesto en la parte resolutive de la sentencia del 01 de febrero de 2019 implica que tácitamente se impartió una obligación de hacer para Colpensiones consistente en emitir acto administrativo donde se ordenara el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la demandante en los términos allí dispuestos, esto es, en cumplimiento de los requisitos de la ley 797 de 2003 y **una vez acreditara la desafiliación del sistema**, actuación esta de la cual no se observa cumplimiento alguno por parte de Colpensiones por lo que le asiste razón a la parte ejecutante en que se libre mandamiento de pago en contra de Colpensiones según lo ordenado en las sentencias del proceso ordinario base de ejecución pero en los términos antes indicados.

Por lo anterior lo legal y pertinente será REVOCAR parcialmente el auto del 05 de octubre de 2022 mediante el cual se resolvió negar la solicitud de mandamiento de pago para en su lugar LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en favor de LUZ ANGELA LONDOÑO ÁLVAREZ y en contra de COLPENSIONES, por la obligación de hacer consistente en emitir un acto administrativo que de cumplimiento a las sentencias del 01 de febrero y 23 de septiembre de 2019 donde se DECLARÓ que la demandante cumple con los requisitos para pensionarse bajo las prerrogativas del artículo 9 de la Ley

797 de 2003, **una vez acreditar la desafiliación del sistema**, obligación esta que debe ser cumplida en el término de dos (02) meses siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo.

En el hipotético caso de que no se cumpla con la obligación antes mencionada en el término indicado la parte ejecutante, podrá solicitar en proceso aparte la ejecución por los perjuicios moratorios en los términos del artículo 433 del C.G.P.

De otro lado debe advertirse que no tiene vocación de prosperidad la petición de librar mandamiento de pago por los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, pues las sentencias objeto de ejecución no dijeron nada al respecto, y por lo tanto el título ejecutivo, no cumple con el requisito de ser un título **expreso**, por cuanto en el mismo no se encuentra la obligación debidamente determinada, especificada y patentada.

Por lo anterior lo legal y pertinente será CONFIRMAR la providencia de primera instancia en este punto en particular.

Sin costas en esta instancia por la forma en que se resuelve el recurso de apelación.

EL FALLO DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto emitido por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín el 05 de octubre de 2022 mediante el cual se resolvió negar la solicitud de mandamiento de pago para en su lugar LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en favor de LUZ ANGELA LONDOÑO ÁLVAREZ y en contra de COLPENSIONES, por la obligación de hacer consistente en emitir un acto administrativo que dé cumplimiento a las sentencias del 01 de febrero y 23 de septiembre de 2019 donde se DECLARÓ que la demandante cumple con los requisitos para pensionarse bajo las prerrogativas del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, **una vez acredite la desafiliación del sistema**, obligación esta que debe ser cumplida en el término de dos (02) meses siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, según lo argumentado en la parte motiva de esta providencia.

En el hipotético caso de que no se cumpla con la obligación antes mencionada en el término indicado, la parte ejecutante, podrá solicitar en proceso aparte la ejecución por los perjuicios moratorios en los términos del artículo 433 del C.G.P.

SEGUNDO: CONFIRMAR el auto emitido por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín el 05 de octubre de 2022 en todo lo demás, según lo argumentado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

CUARTO: Déjese copia de lo resuelto en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo.

QUINTO: Lo resuelto se notifica en ESTADOS.

Los Magistrados,



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTINEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 034 del 28 de febrero de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>